



Dirección General de Infancia,  
Familia y Fomento de la Natalidad  
CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



Plan de  
Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## **INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

De acuerdo con el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al considerarse este contrato como de servicios, se procede a justificar el recurso a la gestión indirecta para su prestación.

De acuerdo con lo expuesto en la memoria justificativa de la necesidad del contrato así como en la propia descripción de las actuaciones e intervención a desarrollar, los servicios objeto del presente contrato deben ser prestados por personal cualificado y con experiencia constatada para tal fin, garantizando la continuidad el servicio, y que dé cobertura a las necesidades de los menores, y de las familias acogedoras, antes, durante y después del proceso de acogimiento, a fin de facilitar la viabilidad del mismo y de promover nuevos acogimientos familiares.

Conviene señalar, con carácter previo, que el personal necesario para la prestación del servicio sería el siguiente:

<b>CATEGORÍA LABORAL</b>	<b>Nº de Trabajadores</b>
<b>Director (100 %)</b>	<b>1</b>
<b>Trabajador /a Social (100 %)</b>	<b>1</b>
<b>Educador/a Social (100 %)</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

En la plantilla actual de la Subdirección General de Protección de la Infancia, que es la unidad que, dentro de la Dirección General, ejerce la protección de los menores tutelados, hay trabajadores y educadores sociales, pero que no se dedican a la intervención directa con los menores, jóvenes y familias, sino a la coordinación y al seguimiento de recursos y programas en el ámbito del acogimiento residencial.

A ello se une el carácter experimental de este proyecto, siendo la Comunidad de Madrid pionera en desarrollar este trabajo en contextos familiares, preferentemente, con familia extensa, cumpliendo una doble función, la de reforzar el vínculo con esta familia, ya que muchos cuentan con familiares que residen en España, por ejemplo, tíos, pero que por cuestiones culturales y de habilidades sociales, les es difícil asumir el rol de cuidado, por lo que este servicio, aparte del apoyo educativo y sociolaboral al menor y en su caso, al joven, implica un trabajo constante de apoyo a la familia en todos los ámbitos para que el acogimiento tenga éxito, lo que supone muchas horas de trabajo y una disponibilidad de jornada para resolver cuestiones fuera del horario propio de los empleados públicos.

En todo caso, tal y como se ha fundamentado en la memoria justificativa de necesidad y oportunidad del presente contrato, existe un amplio consenso a nivel mundial que concluye que la integración en sociedad, tiene mayor probabilidad de éxito cuando las etapas vinculadas a la infancia y adolescencia se desarrollan en contextos familiares, en todas sus modalidades frente al acogimiento residencial. En menores migrantes esto se intensifica, porque el hecho de poder vivir en el contexto de su familia extensa, reduce considerablemente el riesgo de desarraigo y en consecuencia, las dificultades de carácter emocional y/o conductual que les pudieran impedir su integración en este país.



Este intenso trabajo con el menor/joven y la familia de acogimiento requiere un compromiso importante para ganarse su favor frente a la habitual desconfianza de estos menores y sus familias hacia la Administración, así como una disponibilidad horaria que es casi incompatible con la jornada laboral de un empleado público, ya que muchas veces los contactos tendrán que realizarse por la tarde y excepcionalmente, en fin de semana, para adaptarse a las necesidades de los menores y las familias, es decir, una flexibilidad horaria que no se puede exigir a un empleado público porque no se le retribuye.

Por otro lado, el procedimiento selectivo de carácter generalista y objetivo para entrar en la Función Pública no puede adaptarse a perfiles tan específicos y en este servicio, es fundamental disponer de un conocimiento de los códigos culturales magrebíes, siendo casi imposible encontrar a algún empleado público que se comunique con soltura en Dariya, que es la lengua mayoritaria de los menores migrantes en España.

Asimismo, la fluctuación de cifras relacionadas con el fenómeno migratorio (el año pasado por el contexto de la pandemia no hubo casi llegadas a la península, pero en mayo de este año surgió el conflicto diplomático con Marruecos, lo que provocó una entrada masiva de 12.000 personas, entre ellos, más de 1.100 menores) difícilmente pueden ser abordadas desde la capacidad adaptativa de una estructura pública. Esta realidad se reproduce de igual manera en el resto de las Comunidades Autónomas, donde el grueso de los programas destinados a la atención de menores migrantes es desarrollado por el Tercer Sector, a través de diferentes negocios jurídicos (contratos, convenios y subvenciones).

Las funciones a desarrollar por los citados profesionales, prolijamente descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluirían, en síntesis:

- La selección de la familia más adecuada para aquellos menores cuyo proyecto de intervención sea el acogimiento en familia ajena.
- Diseñar y coordinar el periodo de adaptación del menor con su familia acogedora.
- Coordinar las actuaciones para la adecuada incorporación del menor a su familia acogedora tanto si el menor se encuentra en un centro residencial, como si se encuentra en el domicilio de su familia de origen.
- Seguimiento y apoyo del acogimiento familiar.
- Coordinación con los Equipos Técnicos de las Residencias de Menores de la Comunidad de Madrid y otros Centros Concertados.
- Coordinación con los profesionales de los Servicios de Salud públicos y privados que trabajan con los menores y sus familias.
- Coordinación con los Centros Educativos.
- Coordinación con todos los profesionales de servicios sociales que intervengan en el marco del plan de protección del menor.
- Elaboración de informes de seguimiento de la situación del menor con su familia acogedora.
- Elaboración de propuestas de modificación del ejercicio de la medida de protección dirigidas al Pleno de la Comisión de Tutela del Menor.



- Diseño, ejecución y coordinación del periodo de adaptación cuando se acuerden en relación con el menor el retorno con su familia biológica.

Dada la más que considerable extensión de esta relación de tareas, cabe concluir la imposibilidad corriente de atender con medios propios el servicio de apoyo domiciliario que las familias requieren para garantizar el mantenimiento de los acogimientos existentes, así como el impulso de nuevos acogimientos, siempre en beneficio de los menores protegidos, y en su caso, jóvenes.

Al mismo tiempo, el Programa Presupuestario 232F "Protección a la Infancia y al Menor" tampoco dispone de los créditos necesarios para acometer el incremento de plantillas que la gestión de este servicio requeriría ni el de otros gastos que se deberían asumir, resultando imposible el incremento presupuestario que ello requeriría en los momentos actuales. Por ello, es preciso tramitar un contrato de servicios para su gestión conforme a los términos establecidos en la Ley 9/2017.

En Madrid, a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA,  
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Fdo.: Alberto San Juan Llorente

